

# NACION, REGION Y FINES MISIONALES

TEXTO PARA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2034  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Carlos Mario Perea Restrepo<sup>1</sup>

Dice el primer objetivo del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Colombia (PLEI 2034): *“Fortalecer el carácter nacional y la vocación de integración y desarrollo local y regional de una universidad que cumple con sus fines misionales, es coherente con su naturaleza y su responsabilidad social y aprende y se transforma desde la promoción de la creación, la investigación y la innovación”*.

¿Cómo convertir ese objetivo en una realidad eficaz y actuante, esto es una realidad capaz de transformar dolencias de una nación cruzada por la guerra y la inequidad? Sugerir respuestas al interrogante, de cara a un proyecto de Universidad visualizada hacia el 2034, constituye el cometido de las presentes páginas<sup>2</sup>.

Tres nociones propone el objetivo estratégico aquí en consideración. Primero la conexión con la nación, el *“carácter nacional”*. Segundo el contacto con lo local y lo regional, la *“vocación de integración”*. Tercero, para la Universidad, el nexo entre lo nacional y lo regional se realiza desde sus *“fines misionales”*, esto es, su *“responsabilidad social”* en términos de *“creación, investigación e innovación”*. El interrogante central se reformula: ¿De qué modo el *“carácter nacional”*, la *“vocación de integración”* y los *“fines misionales”* de la Universidad se encaminan a la superación de los males que acosan a un país históricamente atravesado por la violencia y la desigualdad?

En el punto de partida, cada noción será abordada mediante la formulación de una tesis. Respecto a la primera, el *“carácter nacional”*, el vínculo entre la nación y la Universidad se teje mediante la búsqueda de la paz. En cuanto a la segunda, la *“vocación de integración”*, se asume que el nexo con la nación se produce desde las regiones y las localidades haciendo realidad el principio de la paz territorial. Por último los *“fines misionales”*, frente a una nación de tantas urgencias, se articulan desde una acción colectiva de *“la creación, la investigación y la innovación”* que atienda tópicos estratégicos de la paz. Mediante el desarrollo de diez afirmaciones

---

<sup>1</sup> Profesor Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Correo: carlosmarioperea@gmail.com

<sup>2</sup> A fin de abordar el primer objetivo estratégico del PLEI se puso en marcha el Centro de Pensamiento Región Nación. Socorro Ramírez y el autor dirigen el Centro. El presente texto recoge las conversaciones que han rodeado su puesta en marcha, más sus afirmaciones son responsabilidad exclusiva del autor.

se dará contenido a cada noción y su respectiva tesis<sup>3</sup>, reservando un apartado final para la enunciación de seis recomendaciones de acción. Es el esquema que ordenará el texto.

**PRIMERA AFIRMACION.** Dada la trayectoria histórica de Colombia, la búsqueda de la paz teje los conectores que vinculan la Universidad a la nación.

Antes de cualquier cosa, ¿qué significa el “carácter nacional” de la Universidad? Tal carácter no proviene simplemente de su extensión sobre distintos territorios mediante la creación de Sedes –las nueve que existen hoy y las que puedan ser creadas en un futuro-. La condición “nacional” de la Universidad proviene, más bien, de su capacidad de influir sobre los destinos del país<sup>4</sup>. La respuesta posible ha de ser política, valga decir, la Universidad ha de comprometer una voluntad inequívoca en la búsqueda de salidas a aquello que encarne los más sentidos nudos de la vida colectiva. El referente adecuado para pensar esos nudos –así lo creemos- es la paz. Es más, la paz no deja de ser la urgencia más sentida de nación. De allí que se le asigne la función de hilo conductor entre nación y Universidad.

Sin embargo, el horizonte de la paz es sin duda un camino plagado de dificultades. Ha sufrido duros reveses que han puesto en vilo su legitimidad, primero la derrota en el plebiscito y luego la victoria electoral para la presidencia de fuerzas poco afectas a ella. Los detractores se multiplicaron, algunos porque la paz afecta sus intereses particulares, otros por la resistencia a la negociación con una guerrilla desacreditada en lo político y rechazada en lo social. La paz de La Habana no logró concitar el conjunto de las energías nacionales, viendo erosionada la legitimidad que le permitiría convertirse en un proyecto de transformación de algunas estructuras profundas. Es más, para su infortunio, se convirtió en la renovada fuente de la polarización política y social en el país. Ciertamente, su implementación ha propiciado fuerzas en abierta pugna, unas verdaderas piedras que bloquean el camino, otras intentos ciertos de desterrar de raíz la violencia.

Frente a la contundencia de la polarización, no faltan las razones para que se vea en la paz apenas un interés más de los que pueden movilizar ciertas fuerzas sociales y políticas. Su poder de convocatoria está minado, dirían. De tal suerte, ¿tiene sentido conferirle ese papel de gozne entre Universidad y construcción de nación? Hay que explicitarlo desde el comienzo. El balance entre dificultades y posibilidades arroja un saldo positivo que hace de la paz el lugar desde donde jalonar el esfuerzo venidero de país y, por tanto, de perfilar el conector que vincula la Universidad Nacional a los destinos colectivos.

---

<sup>3</sup> Las afirmaciones 1 a 7 se ocupan de la primera noción; la 8 y la 9 de la segunda; la afirmación 10 y las recomendaciones, por último, dan cuenta de la noción de los “fines misionales”.

<sup>4</sup> Por supuesto, para intervenir el curso de la nación la Universidad cuenta con la ventaja estratégica de su presencia en nueve regiones, cinco de ellas en las fronteras.

En efecto, aún frente a tamaña dificultad la paz puede y debe cumplir ese papel. Si la Universidad tiene que trazarse una mirada estratégica de largo plazo, la paz recoge tres nudos que aún no logran ser resueltos. De un lado el conflicto armado cobró nuevos bríos, la continuidad de renovados agentes imponiendo su voluntad armada demanda una tramitación -cualquiera que ella sea-. De otro lado, las violencias no conectadas a las expresiones armadas siguen haciendo su abultada presencia -lo revela la violencia urbana al alza-, plantando la tarea de reconstrucción del tejido social y la convivencia. Por último, en tercer lugar, los resortes profundos que aguardan tras la producción de tantas violencias apenas si han sido tocados, como bien lo atestigua la nueva postergación por la que pasa la reforma rural. Como ha sucedido una y otra vez, las transformaciones que estremecen las estructuras de poder o no son intervenidas o vuelven a ser postpuestas. Frente a ese nervio profundo de país, la paz recoge la honda y viva aspiración a una nación liberada de violencias, democratizada en sus accesos al poder y equitativa en el disfrute de los bienes materiales y simbólicos. Por ello la búsqueda de la paz enlaza la Universidad a la resolución de los grandes desafíos que entraña la vida colectiva de Colombia. Ni el país ni la Universidad pueden renunciar a ella, es la apuesta política que aquí se sustenta.

**SEGUNDA AFIRMACION.** Existe un nuevo momento de sociedad, un proyecto de paz a futuro ha de concebirse de cara a esa sociedad en emergencia

El planeta entero vive un nuevo momento de sociedad, Colombia no es la excepción. Ciertamente, la masiva movilización social de finales de 2019 da cuenta de un malestar que cala hondo en los más diversos segmentos de la sociedad. Las marchas fueron nutridas en mucho por jóvenes de diversos estratos sociales –con marcada fuerza de la clase media-, pero también por personas de otros grupos de edad provenientes de los más variadas sectores sociales. Su carácter masivo en simultánea en varias ciudades, sostenidas durante más de un mes, le dan su notoriedad y marcan la diferencia respecto a las marchas de tiempo atrás.

La protesta nació empujada por el descontento con las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno, amén del desacuerdo con el manejo de la implementación de la paz y la falta de atención al asesinato de líderes y lideresas sociales. En esos términos, la protesta tenía como blanco directo de sus quejas al errático gobierno de Duque, sus proyectos de reforma –tributaria, laboral y pensional-, así como el sostenido incumplimiento de acuerdos pactados (la paz y la inversión en educación superior). Con todo, un paso más allá de las motivaciones específicas, la gigantesca movilización saca a flote un profundo descontento que recorre la sociedad de un extremo al otro, descontento ahora traducido en la acción directa que se expresa sin violencia en las calles.

No es un acontecimiento privativo de Colombia. Movilizaciones ciudadanas de cortes similares vienen recorriendo el planeta desde inicios de la segunda década de este siglo. Arrancó con la llamada “primavera árabe”, un calificativo polémico que sirvió para caracterizar el despertar airado de una buena parte de los países del

norte de Africa. Luego pasó a Europa –con enorme fuerza en España- y poco después se trasladó a los Estados Unidos. El fenómeno se viene reproduciendo una y otra vez en más de una nación. En los mismos días de finales de 2019, entre otros países con movilizaciones masivas, Chile traía desde un tiempo antes una impresionante estela de marchas que hoy no terminan todavía.

Un inquietante y decisivo fenómeno de construcción de poder se avizora tras esta impresionante irrupción de la sociedad que protesta a lo largo y ancho del mundo entero. En todos los casos -con las más variadas trayectorias finales- la sociedad ya no pide que nadie la represente. Su voz y su indignación no las delega en ningún actor, ni en los partidos ni los movimientos políticos, ni en el Estado ni en otra institución. La sociedad se hace y se manifiesta a sí misma, ahí reside su fuerza, ahí descansa su debilidad –al menos toda vez que deba nuclear sus demandas heterogéneas para convertirlas en polo de poder alternativo-.

Es el significado preciso del nuevo momento de sociedad que atraviesa el mundo en general y el país en particular: la recomposición de la relación entre la sociedad, de un lado, y el Estado y las instituciones del otro. El proyecto de la modernidad anuncia una vez más su agotamiento –incluyendo sus variantes posmodernas-, anunciando la emergencia de un renovado protagonismo de la sociedad.

El acontecimiento tiene grandes implicaciones sobre un proyecto de paz que se quiere pensar a futuro. Por principio, pone en evidencia la precariedad de una paz que se hace desde el Estado y los actores armados, sin el concurso protagónico de la sociedad y sus demandas. Naturalmente, uno y otros no podrán dejar de cumplir un papel decisivo. Pero la paz de La Habana, con todo y las muchas razones que justificaron la necesidad de la negociación cerrada en el exterior, ¿no halló uno de sus limitantes insalvables en el formato de un diálogo entre Estado y guerrilla por completo ajeno a la sociedad?<sup>5</sup> Amén de las fuerzas políticas que capitalizan el descontento, ¿los resultados del plebiscito de 2016 no tienen todo que ver con una paz que a muchos se les aparece extraña y lejana?

La paz como proceso a futuro –y como conector de la Universidad-, significa entonces un laborioso trabajo con el fortalecimiento de la sociedad en emergencia, sus movilizaciones y expresiones, de cara a una resignificación de lo público y la necesidad de intervenir sus ensambles.

**TERCERA AFIRMACION.** Pese a sus dificultades la paz no deja de ser un sentido valor de sociedad, lo testimonian las movilizaciones ciudadanas de las tres últimas décadas.

A no dudarlo, la paz ha perdido grandes batallas que han terminado por minar su legitimidad y potencial de convocación, se dijo ya. No obstante, pese a la condición

---

<sup>5</sup> Incluso en el formato del Caguán, donde hubo una multitud de encuentros con sectores de sociedad, el Estado y las FARC no dejaron de ser el centro del proceso.

de una paz que va y viene –se verá más adelante-, ella encarna un valor que recoge un recóndito sentimiento de cambio frente a un mundo que se precariza por más de un flanco. Es un dato de no poca monta en una era histórica donde se adelgazaron las utopías y se desvanecen los proyectos políticos: en medio de esa condición de la contemporaneidad, la paz sigue interpelando la perentoriedad del cambio y la transformación. No de modo gratuito la paz negociada ha sido la estrategia dominante en la larga historia de la paz colombiana, muy por encima de la estrategia opuesta, la guerra y la contención armada.

El seguimiento de la trayectoria de las luchas sociales en el país muestra una tendencia al aumento a partir de mediados de los años 90, es decir, se ha vivido la presencia de la movilización social en intensidad creciente a lo largo de dos décadas, parada más allá de la guerra (Archila, García, Parra y Restrepo, 2019). Se trata de una acción colectiva de la sociedad donde los motivos políticos y culturales ganan audiencia –dejando un poco al rezago los temas relativos a las condiciones materiales de vida-, una buena parte de ellos animados por la exigencia de garantías a los derechos humanos, el de la vida en primer término. La movilización contra los desmanes de la guerra y sus actores, así como a favor de la paz, ganan audiencia en la sociedad que se manifiesta en la calle.

Una razón de más para depositar en la paz el vínculo de nación. En Colombia ha sido el referente para la presencia de reclamos de transformaciones de fondo, arrastrando en sus exigencias tanto a fuerzas políticas como sectores sociales que de otro modo se mantendrían lejos de orientaciones de esa naturaleza. Pese a los muchos debates por los que ha pasado la ya vieja tesis de las causas estructurales de la violencia, el imaginario de una violencia que será extirpada mediante el cambio de las estructuras que la producen no pierde vigencia en la opinión pública del país<sup>6</sup>.

Por demás, y otra vez pese a la pérdida de peso de la paz entre la opinión pública, la esperanza de su construcción ha generado un vasto movimiento social en torno suyo. Los Acuerdos de La Habana desataron una cruda polarización, pero el proceso que le acompañó maduró una sociedad en torno a la búsqueda de la paz. Se entronizó una conciencia colectiva que piensa, no desde el conflicto y la guerra, sino desde la paz y los posibles escenarios de futuro que podrían sobrevenir con la desaparición de la violencia<sup>7</sup>. Lo confirmará con fuerza la gigantesca movilización ciudadana que desató la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un tema que retomaremos en breve.

---

<sup>6</sup> Incluso el diagnóstico de la Seguridad Democrática se funda en la causa estructural de la ausencia del Estado, ausencia pensada como fragilidad de la autoridad; la solución, de partida una acción militar, pero después una presencia masiva del desarrollo y las instituciones en las regiones (es la racionalidad de la Consolidación Democrática).

<sup>7</sup> Comenzando la negociación con las FARC la sociedad en movimiento enfrentó la ausencia de un discurso sobre la paz, mientras abundaba el discurso sobre la guerra y sus actores. Junto a la emergencia de los discursos en torno a la verdad, la justicia y la reparación -colocando en el centro a las víctimas-, el proceso de sociedad empujado por la negociación en La Habana representó un giro sustancial en las visiones de la paz y de país.

Para completar el panorama, las movilizaciones ciudadanas que conmovieron el escenario nacional durante fines de 2019 lo plantaron con claridad. Entre las quejas que movieron las marchas, quedó claro que el país demanda y exige la paz a la manera de una urgencia que está más allá de las vacilaciones de los partidos y el gobierno en el poder. La paz no se negocia, es una aspiración de nación que no admite sino voluntad y decisión.

La paz es un valor supremo. La desaparición de la violencia –la neutralización de sus actores y con ellos de sus dominios territoriales-, significa un paso decisivo en la dignificación de la vida: supone el respeto al valor máximo de la vida, así como la supresión de sus tantos efectos deletéreos sobre la democracia, la acción colectiva y la convivencia. No se trata sólo de la violencia misma, más allá la instauración de la paz entraña la remoción de las realidades que nutren las opciones violentas. El país profundo del que brotan la muerte violenta y la guerra debe ser confrontado: la precariedad de la democracia, la expansión de las ilegalidades, la inequidad rampante, la desigualdad en el acceso al poder. Por ello la paz definitiva y completa es un valor supremo, un horizonte utópico al que no se renuncia por la presencia coyuntural de dificultades y victorias de fuerzas políticas en su contra.

El proyecto de Universidad hacia adelante debe apoyarse en esa sociedad que ha crecido a la sombra de la búsqueda de la paz. Ahí está caldeada la posibilidad de anclar una acción con miras a instaurar un país sin violencia y con equidad, allí está avanzada un destacado movimiento de sociedad. No hacer uso de un imaginario actuante y una trayectoria establecida, amedrentados por un bajón de popularidad, significaría desaprovechar una fuerza articulada a un proceso histórico en movimiento.

**CUARTA AFIRMACION.** La paz estable y duradera llegará hasta cuando se modifiquen los balances de poder a favor de una sociedad organizada y potente.

Al planeta entero lo atraviesa una gran convulsión. La pandemia del Coronavirus ha provocado lo impensable, la postración del globo en su conjunto a causa de un mal que azota a todos sin distinciones de ninguna naturaleza. Afecta los países privilegiados tanto como los países de la periferia, contamina a los pobres por igual que a los ricos<sup>8</sup>. Otros males tienen indudables consecuencias globales, pero sus impactos se dejan sentir de formas en extremo diferenciadas entre el norte y el sur. El Coronavirus, de modo distinto, no sólo ha actuado con una velocidad sorprendente sino que además ha golpeado con fuerza a Europa, el continente de la opulencia mundial que se había mantenido al abrigo de grandes calamidades.

La nivelación planetaria de sus efectos golpea sin el menor miramiento la prepotencia de la humanidad -la que le ha guiado en el arrasamiento del planeta-, revelando como nunca antes su irracionalidad y su exceso. El contagio no es un

---

<sup>8</sup> Por supuesto existen vulnerabilidades que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta. No es la discusión que aquí interesa.

síntoma más de la miseria y el atraso, es una amenaza a la condición humana que pone en vilo su continuidad. Poco importan los prodigiosos avances de la tecnología y la ciencia, la pandemia ha puesto en evidencia la condición profunda de lo humano como ser situado y dependiente, tan biológico y vulnerable como los demás seres vivos que pueblan el planeta. Los ambientalistas y ecologistas lo vienen gritando a voces desde hace décadas, más nada como esta epidemia lo ha puesto en evidencia de manera tan terminante.

La ciencia, sin la menor duda, ayudará a sintetizar las curas necesarias que permitan superar el trance; además, la organización de un mundo a la medida de sus descubrimientos ha impedido que el virus tenga consecuencias todavía más imprevisibles y en definitiva catastróficas. La humanidad ha enfrentado grandes pestes a lo largo de la historia terminando por superarlas, pestes que llegaron a prolongarse durante 60 años llevando consigo poblaciones enteras (Lederman, 2003). No se trata de crear pánicos colectivos, tan extendidos en esta era de la inseguridad y la precariedad de la actuación colectiva. Como ha sucedido antes, la humanidad saldrá airosa del coletazo.

Con todo, la pandemia ha producido ya dos hechos de la mayor trascendencia. De un lado detuvo el mundo como nada antes había podido hacerlo. Pese a que algunos países no han adoptado la política del encierro, la febril y obsesiva actividad humana se ha paralizado. El virus puso el globo en cuarentena, sin que deje de lanzar sus amenazas hasta en lo más íntimo de la vida privada en la familia. Se impone un momento de recogimiento y silencio, un momento que debiera poner en vilo el lugar de lo humano en la tierra.

¿El Coronavirus será el primer episodio de las venideras crisis globales que sobrevendrán, jalonadas por el agotamiento de los recursos y la transformación ambiental de la tierra? El panorama de posibles crisis futuras, ¿hará que este recogimiento planetario pueda al fin modificar la mirada unilateral y miope de los poderes mundiales, ebrios de crecimiento y desarrollo económico a costa de lo que sea? Frente a una modernidad que hizo de la economía su santo y seña –colocando todo el edificio social a su servicio y exigencia-, el encierro detiene por vez primera la marcha alocada y sin pausa de un mundo esclavizado por la economía. Es el otro hecho que la pandemia pone de relieve: los centros del poder mundial deben reconsiderar sus orientaciones en función de un mundo cruzado por la dependencia y la urgencia de equidad.

No es claro que vendrá una vez se supere la amenaza del Coronavirus. En el peor de los casos puede pasar que no se modifique nada, el capitalismo y sus dogmas neoliberales seguirán regentando el mundo en los términos que lo venían haciendo –quizás con el desarrollo de nuevas tecnologías de control conectadas a un renovado papel del Estado-. Pero también es dable la emergencia de un movimiento en la dirección del enunciado final del párrafo anterior: la lógica del poder tendrá que moverse en función de la tierra y sus recursos –tantos en trance de evolución y tantos en agotamiento-, poniendo entre paréntesis la hegemonía de una

racionalidad económica que comprende la realidad nada más que en términos de crecimiento productivo (¿de lucro?).

Sea cual sea el desenlace en los núcleos de la dominación mundial, en la sociedad que hoy se moviliza masivamente el Coronavirus dejó sentada una conciencia de dependencia y solidaridad planetaria que alimenta con nuevas consignas su protesta. En particular, el acontecimiento redobla la resistencia frente a un esquema de desarrollo que hace de la minería su punta de lanza. El choque entre la gramática desarrollista y la defensa social del medio ambiente sin la menor duda se verá escalada. En Colombia acaba de ser expedido el decreto que reglamenta la investigación sobre los efectos del fracking, ya leído como un paso gubernamental del todo lesivo dadas sus disposiciones amañadas y su desconocimiento de los efectos socio ecológicos de la práctica en muchos otros tantos lugares del mundo (Angel, 2020).

La tensión asociada a la irrupción de la sociedad empoderada vuelve y queda puesta sobre la mesa, con efectos sobre la paz proyectada a futuro. Todo proyecto de paz supone la modificación de los escenarios y los actores de poder. En el caso de la negociación con las FARC –por ejemplo-, la firma del acuerdo implica la transformación de su poder en tanto muta de una guerrilla ilegal con dominios territoriales diseminados, a una organización política legal que se juega en los espacios del debate democrático. Con el nexo paz y poder en mente, tanto el nuevo momento de sociedad como la historia de la paz en el país permiten aseverar, sin exageración, que la paz estable y duradera llegará a Colombia hasta cuando los balances de poder se inclinen a favor de la sociedad. Dicho en breve, cuando una sociedad organizada y fuerte sea capaz de neutralizar los viejos poderes del clientelismo y la politiquería, así como los acendrados poderes ligados a estructuras mafiosas por doquier extendidas en las regiones.

**QUINTA AFIRMACION.** La emergencia de un nuevo fermento violento después de un esfuerzo de paz –como está aconteciendo hoy-, constituye en Colombia un comportamiento cíclico confirmado en más de una ocasión.

Desde finales de la década de los 50 Colombia viene intentando desterrar la violencia. El gobierno iniciado en 1958 concibió el proyecto del Frente Nacional como un arreglo institucional dirigido a sacar al país de un grave trance violento, la llamada Violencia con mayúscula (1946-1965). Sus iniciativas de paz pasaron por la constitución de una comisión de estudio de las causas de la violencia, la creación de jueces especiales que mediaran los conflictos sobre la tierra y la reforma agraria, entre otras iniciativas.

Los logros de ese gigantesco proyecto están llenos de matices. De un lado se le puso término a la amarga confrontación entre liberales y conservadores -una rencilla cargada de violencia con un siglo de duración-, haciendo posible la mayor



atenuación de las violencias de las últimas seis décadas<sup>9</sup>. Con todo, las profundas confiscaciones democráticas del acuerdo bipartidista, junto a la emergencia de una boyante economía ilegal amasada a la sombra del narcotráfico, dieron pie a un nuevo recomienzo de la violencia y la guerra. Los actores en disputa se multiplicaron y los motivos de conflicto se desdoblaron, configurando el impresionante espectro de actores que caracteriza la violencia contemporánea hasta el día de hoy, un espectro que se prolonga desde los grupos armados hasta la violencia del Estado, pasando por las pandillas perturbando la calle de la ciudad.

La primera generación guerrillera de los años 60 dio origen a tres de sus grandes exponentes -FARC, ELN y EPL-, al tanto que la década siguiente produjo unas cuantas agrupaciones más, incluyendo el M-19. Frente a la proliferación de organizaciones insurgentes, desde inicios de la década de los 80 se abrió una búsqueda de la paz que hasta los días presentes no termina. En efecto, en 1982 la administración de Belisario Betancur hizo de la paz una política pública de Estado convocando las guerrillas y la sociedad a lo que entonces se llamó Diálogo Nacional. Desde ese momento las tentativas de paz se han sucedido una tras otra, gobierno tras gobierno. En las tres administraciones siguientes depusieron las armas cinco agrupaciones insurgentes, en todos los casos mediante desmovilizaciones no precedidas por procesos de negociación con el gobierno: el M-19 durante Virgilio Barco; una disidencia del EPL (Esperanza, Paz y Libertad), el Quintín Lame y el PRT con César Gaviria; y una fracción disidente del ELN (Corriente de Renovación Socialista) mientras estaba Ernesto Samper en la presidencia. Pocos años más tarde se puso en marcha el despeje del Caguán (1998-2002), un intento de acordar la paz con las FARC; el resonante fracaso de ese proceso abrió el camino a la corriente de la derecha encarnada en Alvaro Uribe, traducida en la doble vía de la Seguridad Democrática: de un lado la guerra a muerte contra las FARC, del otro la negociación con largueza hacia las organizaciones paramilitares. Finalmente, en la recién concluida administración de Juan Manuel Santos, la ciudad de La Habana sirvió de escenario a la suscripción del acuerdo que llevó al desarme y reincorporación política de las FARC.

En el trascurso de ese dilatado proceso son muchas las tentativas puestas en marcha, cada una marcada con algún sello distintivo del gobierno en ejercicio: diálogo sostenido –fuera del país como Tlaxcala y La Habana, adentro como el Diálogo de Belisario y el Caguán-; entrega incondicional como los cinco grupos de comienzos de los 90; despeje de zonas y entrega de la jurisdicción a la insurgencia al estilo del Caguán; la guerra abierta y sin cuartel de la Seguridad Democrática. Un verdadero manojo de estrategias a las que hay que sumar las iniciativas institucionales como la Constituyente del 91, la reforma descentralizadora de finales de los 80 y las reformas políticas de los 90 y 2000. De igual modo, más de una

---

<sup>9</sup> Durante la segunda mitad de los 60 y la década siguiente los niveles de homicidio se redujeron de manera notable, pese a que por esos años se constituyó la primera generación de guerrillas modernas (FARC, ELN y EPL) e irrumpió una extendida turbulencia social por la emergencia, entre otros, de un férreo movimiento campesino y una intensa movilización estudiantil.

estrategia de intervención territorial ha sido puesta en marcha, algunas con grandes inversiones presupuestales: el Plan de Rehabilitación de la administración Lleras arrancando los años 60; el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) iniciado durante la administración Betancur y llevado a su mayor realce por el gobierno de Virgilio Barco; la Consolidación Democrática de Alvaro Uribe; y ahora los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una estrategia nodal del Acuerdo de La Habana.

Colombia es un verdadero laboratorio de paz, en el año 2022 –apenas en unos cuantos días- se completarán cuatro décadas de una búsqueda incesante que pasa por la más variada gama de tentativas.

Sin embargo, pese a todo ese denodado esfuerzo, la paz no termina de llegar. Cada una de las tantas tentativas se ha prolongado, tristemente, en renovados fermentos violentos. El primer proceso contemporáneo, la paz de Belisario Betancur, culminó en la conflagración del Palacio de Justicia, un acontecimiento que operó como anuncio de la venidera expansión de las guerrillas y el surgimiento del paramilitarismo –mientras tomaba cuerpo la cruda guerra contra el cartel de Medellín-. A modo de remedio de la intensa crisis que azotó al país durante la segunda mitad de los años 80, la Constituyente de 1991 diseñó una nueva carta de navegación. Fue un gran pacto de paz, construido con el concurso de las más diversas fuerzas sociales y políticas. Sin embargo, bien pronto, la guerra entró en el más intenso de sus escalamientos; la sociedad fue convertida en el blanco de los ataques, como bien lo muestra el alza sin precedentes del desplazamiento y el despojo, las desapariciones y los homicidios<sup>10</sup>.

Ante el resonante fracaso del Caguán, la administración de Alvaro Uribe adoptó el camino de la guerra frente a las FARC. Es la ocasión en que se adoptó de manera más decidida la opción de las armas, la estrategia opuesta al acercamiento dialogado que ha dominado la historia doméstica de la paz<sup>11</sup>. El efecto combinado de guerra contra la guerrilla y negociación con el paramilitarismo produjo una pronta disminución de los indicadores del conflicto y la victimización. Sin embargo, ni la guerra ni la negociación –ni el efecto combinado de las dos-, pusieron término al conflicto armado interno. La guerrilla se adaptó a las condiciones de la confrontación desarrollando nuevas formas de combate y resistencia, dotándose de la fuerza que le permitió imponer una prolongada negociación con el gobierno en La Habana<sup>12</sup>. Los paramilitares, por su parte, entraron en una convulsa negociación hecha con largueza y poca previsión, derivando de inmediato en poderosas organizaciones

---

<sup>10</sup> Todas las modalidades de victimización, sin excepción, experimentan una intensa alza entre 1995 y 2003. Base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

<sup>11</sup> César Gaviria adoptó la política integral contra la violencia durante la segunda mitad de su mandato, luego del absurdo bombardeo de Casa Verde el mismo día de la elección de los miembros de la Constituyente. Frente a la Seguridad Democrática es un esfuerzo limitado.

<sup>12</sup> El ELN, de su lado, ha pasado de la condición de guerrilla menor a aparecer fortalecida en numerosos rincones, una parte de ellos antiguos territorios de control de las FARC

criminales apoderadas de numerosas localidades –el cartel del Golfo de Urabá y los Rastrojos las más fuertes-<sup>13</sup>.

La constante de reaparición de nuevos fermentos violentos tras cada proceso de paz se repite, otra vez, con la prolija negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Fueron cuatro años no sólo de diálogo, sino de una vasta movilización social en torno a la búsqueda de la paz. La esfera pública se vertebró en torno suyo, incluidos los detractores que se veían obligados a pronunciarse sobre la paz posible. Empero, por encima de esa monumental energía, el país vuelve e ingresa en otro episodio de agentes en armas dominando territorios.

Si los fermentos violentos regresan una y otra vez, con prescindencia de la iniciativa de paz que se le interponga, ¿habrá de concluirse que todo han sido esfuerzos vanos? Por encima de la gigantesca máquina pacificadora aceiteada durante años, ¿no es claro que lo único cierto viene a ser la prodigiosa capacidad de reciclamiento de la violencia? Un prolongado historial de frustraciones ha caldeado un extendido ánimo que no ve en la paz sino una quimera, no importa lo virtuosa que ella sea. El renovado fermento violento actualmente en marcha –luego de tantos y tantos esfuerzos invertidos en su contra-, sostiene con fundamento cualquier visión pesimista.

Empero –y repisando el argumento central de esta parte del texto-, carece de sentido renunciar a una trayectoria colectiva. Desde el punto de vista histórico, ni todo se reduce al lenguaje de lo violento, ni los muchos esfuerzos invertidos se reducen al fracaso y la inoperancia. Para comenzar, al conflicto armado se le ha ido sustrayendo una gran cantidad de actores y contextos configurando una contabilidad de peso, nada menos que la reincorporación social y política de seis guerrillas y una buena porción de los ejércitos paramilitares, cada uno situado en un territorio bajo dominio<sup>14</sup>. La opción de la guerra y los actores armados ha perdido la legitimidad que llegó a tener hasta hace no muchos años.

Por demás, cada tentativa de paz ha sembrado sus logros particulares. La Constituyente la de mayor alcance, sus disposiciones fundaron un país de derechos ciudadanos, dieron origen a una institucionalidad que los protege y dejaron sentado un nuevo marco de referencia para el ejercicio del poder. Las reformas políticas puestas en marcha durante las últimas dos décadas dieron al traste con el bipartidismo, luego de un siglo de cabal dominio de la escena política –nuevas reformas debieron limitar la proliferación indiscriminada de las fuerzas políticas-. Los cambios de cara al municipio han revitalizado la política desde abajo, incluyendo las esferas administrativa y electoral. El Estado ganó presencia en diversos planos, desde el militar hasta en la condición de agente de desarrollo. Entretanto, la sociedad ha venido a transformarse de manera radical, como se viene insistiendo su influencia ya se deja sentir en multitud de aspectos de la vida colectiva. En suma,

---

<sup>13</sup> No son las mismas pese a sus muchas continuidades, de allí la necesidad de hablar de organizaciones sucesoras del paramilitarismo (o neoparamilitares).

<sup>14</sup> También hubo negociación con las Milicias Populares de Medellín hacia mediados de los años 90.

en paralelo a un país que ciertamente recicla con “facilidad” sus actores violentos, los proyectos de paz han empujado la mutación de la sociedad y el Estado en numerosas direcciones.

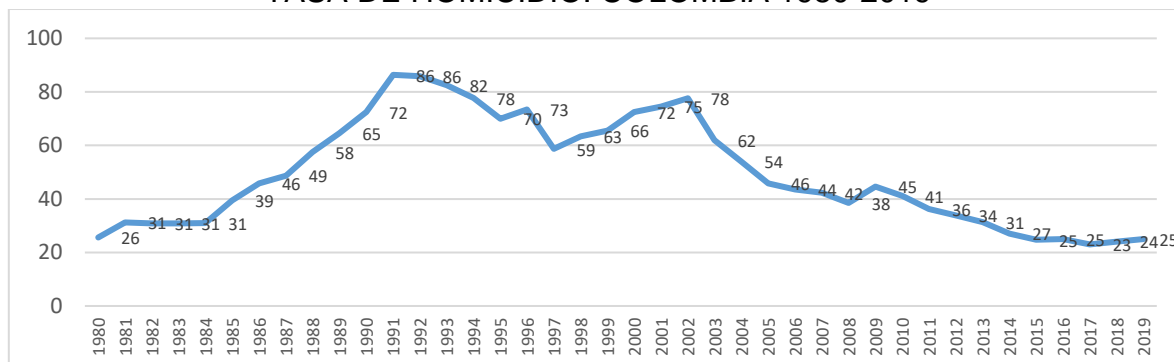
Se trata de un prolongado y tortuoso camino que bien puede llamarse paz escalonada, esto es, procesos con logros parciales que en el largo plazo se acumulan provocando la reducción del conflicto armado y el homicidio. La desmovilización y posterior desarme de las FARC pone la última pieza maestra de la paz escalonada, la guerrilla más poderosa de la historia insurgente del país cruza las complejidades de la reincorporación social y política de sus excombatientes.

Los desaciertos de la paz –incluida su imposibilidad de contener el brote de otro germen violento-, hacen parte de un atormentado historial de pacificación y violencia que arma el devenir contemporáneo de nuestra nación. La paz va y viene, la violencia va y viene. De tal suerte, las adversidades de hoy no le restan fundamento a la paz, sólo la sitúan históricamente. Sigue siendo una urgencia, la Universidad Nacional haría bien en consagrarla como santo y seña de su proyección hacia los años que vienen.

**SEXTA AFIRMACION.** Colombia parece cerrar un prolongado ciclo violento; no obstante, está lejos de resolver el nudo de sus violencias.

Junto a la negociación con las FARC, varios indicios más indican que el país va cerrando, al fin, un prolongado y atormentado ciclo violento. Lo dice la forma de campana que sigue la curva de la tasa nacional de homicidio entre 1980 y 2019 (Gráfico No. 1). Pese a los anuncios de una violencia que prende en una y otra región, desde hace un tiempo se llega a los niveles de homicidio de cuatro décadas atrás. Descender a la intensidad del homicidio de finales de los 70 merece toda consideración, indica la clausura de una violencia atormentada que azotó al país largo tiempo.

**Gráfico No. 1**  
TASA DE HOMICIDIO. COLOMBIA 1980-2019



Fuente: 1980-2016. DANE. Estadísticas Vitales. Defunciones no fetales. Defunciones por causa externa (1980-1989). Cuadro No. 4A.

2017-2018. Forensis 2018. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

2019. Informe Presidencial. Enero 9 de 2020.

Desde la perspectiva del conflicto interno la reducción es considerable. En 2019 la tasa nacional de homicidio fue de 25, un punto por encima de la alcanzada en 2018<sup>15</sup>. En comparación con el momento álgido del conflicto violento –en 1991 la tasa se escaló a 86-, el valor del año pasado da cuenta de un descenso apreciable. Pese a pequeños repuntes en 2009 y 2010, a partir de 2002 el homicidio viene cayendo en picada. Si en 2022 se completan 40 años de una incansable búsqueda de la paz –se acaba de decir en la afirmación anterior-, ese mismo año se cierran 20 años de reducción sostenida del homicidio. Es un acontecimiento notable.

No obstante, lejos estamos de resolver el nudo gordiano de los actores armados y sus prácticas violentas. A partir de 2014 –otra vez el Gráfico 1-, la curva desciende por primera vez debajo de 30, oscilando de allí en adelante entre tasas de 23 y 27. Se cumplen seis años en ese rango, al tanto que la curva da muestras de un leve ascenso. ¿Acaso se trata de un techo, un nivel de difícil superación que persistirá con terquedad un tiempo? Así lo sugieren tanto la intensidad de antes del ciclo, como la intensidad a la que se vuelve después de casi dos décadas de disminución.

Una vez se pone ese techo en el contexto del homicidio mundial, Colombia continúa siendo un país de violencia extrema. Sirvan de punto de referencia la tasa media mundial -con un valor de 7 homicidios por 100 mil habitantes-, o el aserto de la Organización Mundial de la Salud etiquetando de epidémica una tasa por encima de 10<sup>16</sup>. De tal modo, pese a la marcada reducción de dos décadas, Colombia sigue puntuando tres o cuatro veces la violencia media mundial y hace mucho está lejos de la frontera de la epidemia, permaneciendo estacionaria en un techo que no da muestras de fácil superación.

El conflicto nacional está lejos de haber sido resuelto. En lo que va corrido del siglo XXI el país tuvo una tasa promedio de homicidio de 46 (entre 2000 y 2019), durante la década que acaba de terminar puntuó en promedio 29 (de 2010 a 2019). En los dos períodos desborda el mojón de los 25, la frontera donde arranca la violencia extrema<sup>17</sup>. El techo es todo menos una condición gratuita, surge de la situación crítica en que están sumidas varias regiones de nueva cuenta convertidas en escenarios de conflicto armado y violencia<sup>18</sup>. Se trata de un claro fermento violento

---

<sup>15</sup> Informe del Presidente de la República. Enero 9 de 2020. La tasa es por 100 mil habitantes. En: <https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-resalta-los-buenos-resultados-del-2019-en-materia-de-seguridad-y-dijo-que-espere-que-en-el-2020-200109.aspx>

<sup>16</sup> La tasa media mundial en Geneve Declaration (2015). OMS (2002).

<sup>17</sup> Latinoamérica es en la actualidad el continente más violento del planeta. A fin de hacerlo comparable con el resto del mundo se adoptó el límite de 25 como el punto donde arranca la violencia extrema; se tomó como referencia la tasa de Brasil entre 1996 y 2009, con un valor promedio de 25. Perea (2019).

<sup>18</sup> Es el caso de Antioquia y Arauca, dos regiones históricas del homicidio extremo, enfrascadas durante el último tiempo en un nuevo recrudecimiento del conflicto. Antioquia detuvo su descenso sostenido, en 2016 tenía una tasa de 27, en 2018 se trepó a 34 (Correa y Jaramillo, 2019). El caso de Arauca es todavía más crítico, en 2016 tenía una tasa de 26, en 2018 subió a nada menos que 59. A mediados de 2019 la Defensoría del Pueblo del departamento emitió una alerta temprana ante la acción violenta de agentes armados en varios de sus municipios (El Tiempo, 2019). No son los

luego de la paz de La Habana: el ELN en recomposición, las disidencias de las FARC en crecimiento, los cultivos de coca en expansión, el asesinato de líderes y lideresas sociales perpetrado con sistematicidad y método, las organizaciones sucedáneas del paramilitarismo afianzadas, la violencia urbana en ascenso<sup>19</sup>.

La violencia y el conflicto armado no pierden su estatuto de nudo de la vida nacional. El proyecto de la paz tiene plena vigencia.

**SEPTIMA AFIRMACION.** La proliferación actual de actores armados tiene uno de sus más decididos resortes en un negocio de la cocaína en nuevo auge.

La empresa ilegal del narcotráfico cruza por una renovada expansión. En Colombia, la denuncia con claridad el crecimiento exponencial de los cultivos de coca. Si en 2013 el área cultivada había descendido a algo más de 48 mil hectáreas –venía de un descenso sostenido desde 2001-, para el 2018 se escaló hasta las 169.000 hectáreas, un crecimiento del 351% en apenas cinco años (ODC, 2020). La escalada no es el simple producto de la supresión de las fumigaciones aéreas o del oportunismo de los campesinos ante los apoyos que vendrían con los acuerdos de paz, como se ha repetido hasta el cansancio; tiene que ver, más allá, con la acción de empresarios ilegales que bien conocen los márgenes de ganancia que el negocio volvía a generar.

El negocio controlado por los mexicanos, con el cartel de Sinaloa a la cabeza, ha perdido la vigencia que tuvo hasta hace no mucho tiempo. Los consumos en Estados Unidos y Europa crecieron –como no acontecía hace años-, se abrieron nuevos mercados en Asia y Oceanía, mientras los consumos en Latinoamérica se dispararon, en particular en el Cono Sur (Vargas, 2020). Entretanto, nuevos actores han aparecido en el ajedrez global del fenómeno. A modo de ejemplo el Primer Comando de la Capital (PCC) con asiento en Sao Paulo, expandido sobre varios lugares de Brasil: controla la frontera con Paraguay -por donde ingresa la coca- y hasta incursiona en la intocable mafia de Río de Janeiro; no sólo operan dentro de las fronteras internas, numerosos indicios dan cuenta de sus ramificaciones sobre los otros continentes.

Al igual que el astronómico crecimiento de los cultivos de coca –haciendo de Colombia otra vez el principal proveedor de cocaína en el mundo<sup>20</sup>-, un actor del calado del PCC es posible no más que en el contexto de una empresa en expansión planetaria. Ciertamente el portafolio de negocios de los actores ilegales latinoamericanos se ha diversificado, moviéndose incluso a las inversiones legales;

---

únicos casos, situaciones similares se reportan, entre otros, en Cauca (González, 2019) y Norte de Santander (Pares, 2019). Las tasas de homicidio en Forensis 2016 y 2019.

<sup>19</sup> El Instituto de Estudios Políticos (IEPRI) y la Universidad del Rosario sacaron un libro caracterizando ese nuevo fermento violento. Aguilera y Perea, 2020.

<sup>20</sup> Colombia fue el principal surtidor durante los años 90, hasta cuando sus cultivos descendieron entre 2001 y 2012. Perú lo sustituyó un tiempo, pero con el ascenso iniciado en 2013 Colombia vuelve y ocupa su antiguo lugar.

empero, la cocaína no deja de ser la matriz de la ilegalidad del continente. A la sombra de ella se produjeron y se siguen produciendo actores armados de los más diversos calibres, todos operando desde el control de territorios dominados por la amenaza y el uso de la violencia.

En Colombia los actores armados ilegales se reprodujeron una vez más, lo hicieron de la mano de los jugosos beneficios derivados de sus actividades ilícitas. Pese a que tienden a la diversificación –al igual que en el resto del continente–, la cocaína sigue siendo el núcleo de los ingresos de las organizaciones criminales más fuertes. Otra vez, estamos lejos de desatar el nudo de nuestras violencias.

El fenómeno del narcotráfico es un asunto de incumbencia mundial con particular incidencia sobre Latinoamérica. En más de una de sus naciones el negocio ha echado raíces profundas propiciadoras de severas crisis de gobernabilidad, de violencias sin cuento y de diseminación incontrolada de actores armados. El PCC es uno entre tantos de los actores en Brasil, al igual que en México sus ocho carteles y en Centroamérica las maras, por mencionar no más algunos de los casos más complejos. El narcotráfico arrastra en sus volutas disolventes a los países de economías y Estados más fuertes del continente, pero también a pequeñas naciones en Centroamérica, haciendo de Latinoamérica la región más violenta del planeta.

La premura de la paz no es una demanda cierta sólo en Colombia, es un apremio continental que demanda una acción colectiva encaminada a construir un polo de poder capaz de enfrentar un poder global empeñado en mantener la política de guerra contra las drogas, una política que ha demostrado ser tan ineficaz para contener el negocio, como decisiva en la inflamación de las espirales de violencia en nuestros países.

Pensar la paz en Colombia supone pensar la paz en Latinoamérica. El vínculo con la nación se amplía, se extiende al contexto ampliado de Latinoamérica.

**OCTAVA AFIRMACION.** La conexión con la nación se hace desde las regiones. La “vocación de integración” de la Universidad Nacional –la segunda noción del objetivo estratégico– se traduce en un proyecto de paz que ancla en las regiones, comenzando por las fronteras<sup>21</sup>.

La construcción de la nación se hace tomando como eje de intervención las realidades y singularidades regionales. Asumir el aserto en todas sus implicaciones significa minar el centralismo. Mucho se habla de las grandes asimetrías entre el centro y el resto del país, entre Bogotá y los demás departamentos, entre las zonas integradas a los circuitos institucionales y las periferias. El acaparamiento de los recursos –con exceso en la capital Bogotá, pero también en las zonas integradas a

---

<sup>21</sup> La Universidad tiene cinco Sedes de Frontera: La Paz, la Orinoquía, la Amazonía, el Pacífico y el Caribe.

las redes económicas y políticas-, no es sino una modalidad histórica de construcción del poder. En el país adquiere proporciones proverbiales, marca la construcción del Estado desde los lejanos tiempos de inicios de la República y hoy día no deja de ser dominante, pese a las palmarias comprobaciones de las muchas precariedades del centralismo.

Tentativas de remedio a la situación han sido puestas en marcha. La descentralización administrativa de la década del 80, así como la elección popular de alcaldes y gobernadores por la misma época, constituyen hitos revitalizadores de un sinnúmero de dinámicas locales. Las zonas abandonadas a su propia suerte, proclives a la ilegalidad y el conflicto, han sido intervenidas desde las políticas públicas de la paz: el PNR, la Consolidación Democrática, los PDET, todos buscan socavar el atraso de lugares echados al olvido poniendo en el centro las localidades y regiones.

Con todo, las apremiantes urgencias del momento demandan la reversión decisiva del flujo de poder característico del centralismo. Es preciso quebrar el acaparamiento histórico de los recursos y las decisiones poniendo en marcha estrategias de empoderamiento de las regiones.

Se trata de una aspiración democrática en un doble sentido: primero porque mitiga la inequidad y segundo porque reconoce la pluralidad. En efecto, una expresión más de la extrema desigualdad de Colombia –uno de los países más inequitativos del planeta-, pasa por el contrastante cuadro de pocas zonas disfrutando sin límites de los bienes materiales y simbólicos, junto a multitudinarias zonas cruzadas por la penuria y la pobreza. Basta con traer a cuento las diferencias entre el campo y la ciudad, desigualdad que se vino a traducir en la deuda histórica que acumuló el país con el campesinado.

Asimismo, el anclaje regional pone de presente la pluralidad que atraviesa una nación poblada de abismales diferencias regionales. El país pensado desde el centro –desde sus afanes de poder y desde las urgencias de las burocracias urbanas-, redujo las regiones a meros accidentes geográficos condenando la inversión estatal a la inadecuación y la ineficiencia. El desconocimiento de la pluralidad regional –tan propio del centralismo- juega con peso en la profundización de la agigantada inequidad colombiana. De tal modo, frente al achatamiento del centralismo, el realce de las voces regionales en consonancia con la singularidad de sus historias particulares opera como ingrediente esencial en la recomposición del poder.

La Universidad Nacional es un reflejo del centralismo. Las cinco Sedes situadas en zonas de frontera contrastan al extremo una vez se les compara con la Sede Bogotá, pero también lo hacen respecto a las otras del área Andina –Medellín, Manizales y Palmira-. Divergen en los recursos de que disponen, así como en la participación en la toma de decisiones a causa de una estructura institucional que no reconoce su estatuto.



El anclaje en las regiones será viable cuando las Sedes situadas en la frontera estén dotadas del poder y los recursos que vuelvan realidad un trabajo regional de fondo, recursos que deben ser del orden financiero (profesores de planta adscritos a centros de investigación regional), así como del orden institucional (nombramiento de rectores acompañados de un cuerpo directivo). Tal la condición que hace posible, tanto la cimentación del liderazgo de las Sedes en sus respectivas regiones, como la recomposición del poder dentro de la misma Universidad. Si se trata de transformar el poder histórico del país, no está de más iniciar por la misma Universidad Nacional.

**NOVENA AFIRMACION.** La paz desde las regiones toma cuerpo en la paz territorial, cuya primera expresión se constituyó con la movilización social propiciada por la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

La paz es un proyecto de transformación del poder, arrancando por la supresión del poderío de las armas y las dominaciones cimentadas sobre ellas (la llamada paz negativa). Un paso más allá, es un proyecto de ampliación democrática que busca socavar las condiciones que hicieron viable la emergencia y permanencia del conflicto violento (la paz positiva). En Colombia, la dura experiencia de una violencia que no termina de desaparecer -pese a tantos y tantos intentos-, torna imprescindible la búsqueda de una paz que modifique los balances de poder en la dirección de fortalecer la sociedad y la democracia, se aseveró atrás.

La noción de paz territorial recoge ese espíritu. La concepción de una paz que se hace desde los territorios está a tono con la necesidad de minar el centralismo y su poder que quiere volver homogéneo lo que sólo es pluralismo y diversidad. La paz no es una sola, rígida e invariable; por el contrario, a partir de un conjunto de principios universales surge más de una modalidad de hacer la paz, tantas como las singularidades de las regiones y los territorios lo demanden. La paz tira su ancla en las regiones.

Una meta de esa naturaleza supone desplazar la centralidad de la que gozan el Estado y el Centro en el diseño y puesta en marcha de la paz. Si el relato nacional sobre la historia se ha centrado en el conflicto armado, el pensamiento sobre la paz se ha centralizado en el Estado. De nuevo, ahora se trata de hacer de la sociedad movilizada el nudo neurálgico de la paz.

Un nuevo balance de poder a favor de sociedad toca de modo directo el terreno político, pero también apunta al plano de la convivencia, la sociabilidad y el intercambio de todos los días. Una paz estable y duradera es impensable sin una recomposición honda de la cultura política, un proceso que pasa por la reconstrucción de la convivencia, la esfera donde se dispara una considerable parte de las violencias.

Pese a todas sus resistencias, el gobierno en el poder ha tenido que entender el potencial del proceso territorial desde la sociedad puesto en marcha en torno a los

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Así es, en medio del desentendimiento de la actual administración con el proceso de paz, algunos sectores del gobierno nacional tienen el empeño de poner en marcha la implementación de los PDET. Ellos son corazón del Acuerdo de La Habana, primero porque hacen realidad la consigna de una paz armada desde los territorios, desde sus reclamos y singularidades; segundo porque fueron elaborados a través de un sostenido proceso de participación y consulta de la sociedad<sup>22</sup>. Diez y seis subregiones críticas fueron seleccionadas –agrupando 170 municipios<sup>23</sup>–, poniendo en marcha una planeación participativa que terminó por identificar los nudos críticos de la vida colectiva en los territorios<sup>24</sup>. Al término de cada proceso se suscribió un pacto bajo el nombre de Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), firmado en diciembre de 2018<sup>25</sup>.

Se ha activado un movimiento de las sociedades regionales en torno a la paz. Del total de los 16 PDET, tres fueron realizados en zonas de frontera donde la Universidad tiene sede: La Paz, Arauca y Tumaco. En el Pacífico se hicieron dos involucrando numerosos municipios del Chocó, regiones susceptibles de ser intervenidas desde las Sedes de Medellín y Manizales. En todos los casos se diseñó el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), consistente en un inventario subregional de las obras y emprendimientos juzgados prioritarios<sup>26</sup>. Es el punto de partida para la acción de la Universidad<sup>27</sup>. Se busca reactivar o apoyar –según sea el caso- el amplio proceso participativo que está detrás de los PDET, sometiendo sus PATR a una reflexión que jerarquice y seleccione los proyectos por poner en marcha de manera inmediata –fijando a la vez los proyectos de mediano y largo plazo-.

En suma, la paz territorial proyecta los enunciados puestos en consideración hasta el momento. Lo hace conectando el anclaje regional, la construcción de paz y el desplazamiento del poder hacia la sociedad; pero lo hace también perfilando una ruta de acción mediante la participación en las dinámicas locales activadas por el PDET.

---

<sup>22</sup> Incorporaron casi 220 mil agentes territoriales con el saldo de algo más de 30 mil iniciativas.

<sup>23</sup> Las subregiones y sus municipios fueron seleccionados en razón de su alta pobreza, la presencia intensa de la guerra, la existencia de cultivos ilícitos y la precariedad estatal.

<sup>24</sup> En cada subregión la consulta se movió desde lo local hacia arriba, siguiendo una estrategia metodológica con tres momentos: al inicio lo veredal, después lo municipal y finalmente lo subregional.

<sup>25</sup> Los PATR se ordenan en ocho pilares: 1. Ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo; 2. Infraestructura y adecuación de tierras; 3. Salud rural; 4. Educación rural y primera infancia rural; 5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento rural; 6. Reactivación económica y producción agropecuaria; 7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación; 8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz.

<sup>26</sup> En las Sedes donde no se formuló PDET (Leticia y San Andrés) se trata de seguir la misma huella participativa: avanzar una convocatoria amplia de sociedad a fin de establecer aquellos nudos de la región que habrán de ser sometidos a una intervención colectiva.

<sup>27</sup> En la Sede de La Paz ya se inició. Se arrancó con una conversación cruzada de saberes. Distintas iniciativas regionales pusieron en escena sus proyectos y prospectivas, mientras Bogotá intervino respecto a conflictos de la frontera y la incidencia del conflicto armado en el Cesar. Ahora viene la discusión de los contenidos de los pactos municipales sobre los que se apoyó el PDET.

**DECIMA AFIRMACION.** Los “*finés misionales*” de la Universidad –su “responsabilidad social” en términos de “*creación, investigación e innovación*”–, se llenan de contenido desarrollando caracterizaciones regionales y estudios temáticos que apoyen las movilizaciones regionales y el proceso de paz territorial.

La Universidad se hace parte de la dinámica de sociedad interviniendo a título de actor que pone al servicio del proceso sus dos grandes fuerzas, el saber y la capacidad de convocatoria local. Un paso adelante, sin embargo, ¿cuál es el papel específico de la Universidad Nacional? ¿De qué modo hacer converger el desarrollo regional con los “*finés misionales*” que corresponden a la condición de Universidad?

Como primera medida la Universidad tiene la tarea de mantener viva una mirada de largo plazo, todo lo cual significa impedir que los procesos regionales se ahoguen en el activismo de las tareas inmediatas y urgentes. Su tarea específica consiste entonces en renovar y refrendar a cada paso la conexión de los eventos puntuales con los problemas de fondo que cruzan la región y la nación.

Para cumplir esa tarea la Universidad ha de enfrascarse en la producción de saber riguroso sobre las regiones y el curso del proceso social y político en marcha en cada región. Los contenidos específicos que adoptará ese saber tendiente a nutrir los procesos sólo puede ser determinado en las regiones. No obstante, no sólo están en juego las regiones; igual, la Universidad tiene a su cargo la mirada comparada entre ellas. Por principio, esa mirada global ha de construirse también desde las regiones, volviendo necesario el establecimiento de mecanismos que permitan el intercambio sistemático entre una y otra región.

Con todo, queda pendiente el retorno hacia la nación y la mirada de conjunto, tarea para la que precisa la definición de líneas temáticas que vertebran las regiones. Por lo pronto –y a modo de sugerencia para la discusión en las regiones–, salen al paso los interrogantes: ¿De qué modos se ha construido el poder en la región? ¿Cuáles son los momentos determinantes de esa construcción y en torno a qué actores se zanja? ¿Cómo se hila ese poder en cada esfera de la vida colectiva –lo económico, lo político, lo cultural–? ¿Qué tanto se apoya el poder en la ruralidad, en sus intercambios económicos y sus relaciones sociales? ¿Qué tipo de dominaciones genera la ruralidad propia de la región? ¿Qué lugar desempeñan el Estado y las instituciones? ¿Cómo operan en los equilibrios de poder las apuestas democráticas –sus procesos, los partidos políticos y las organizaciones sociales, los gamonales y el clientelismo–? ¿Cómo se incrusta allí el poder derivado del conflicto armado y de actividades ilícitas como el narcotráfico? ¿Cómo se configura la ruralidad en cada región? En los casos en que se cumpla, ¿qué supone la vida en la frontera? ¿De qué modo la frontera genera los actores que detentan o sufren el poder? ¿Cómo interfiere la condición limítrofe los procesos democráticos y de constitución de actores colectivos? ¿Cómo apoyan los pasos fronterizos las circulaciones económicas, tanto legales como ilícitas? En fin, cada región dará un contenido y una orientación a esas preguntas.

Una palabra final sobre los flujos de trabajo, saber e información entre la misma Universidad. A los procesos regionales ha de jalarse el inmenso saber acumulado en la Universidad, se requerirán apoyos en la producción agropecuaria, el diseño arquitectónico y de ingeniería –entre muchos otros-, junto a la difusión de renovadas tecnologías en todos los campos. La Universidad tiene un profundo saber acumulado, se trata de convocar ese saber con la finalidad de apoyar y sustentar el avance de los procesos regionales impulsados desde las Sedes de frontera. Es el punto de encuentro y conexión entre las sedes de la Universidad, alrededor de una labor regional cruzada por la perspectiva última de reconstruir una nación inequitativa y azotada por la guerra.

## **RECOMENDACIONES DE ACCION**

Recogiendo las reflexiones anteriores se proponen cinco actividades estratégicas que conecten la práctica de Universidad a la construcción de la paz y la resolución de los grandes nudos nacionales.

### **1. Centro de Pensamiento Región Nación**

Fortalecer el Centro de Pensamiento Región Nación, ya en marcha. Tiene como fin contribuir al proceso de construcción de Nación desde las realidades y las demandas de las regiones. Para ello, tomando como eje las Sedes de Frontera –y sumando a sus requerimientos las otras Sedes-, se desplegará un conjunto de procesos encaminados a la reconstrucción del Estado y la sociedad regionales.

Para cumplir ese cometido se tomarán como eje las cinco Sedes de Frontera (La Paz, Arauca, Leticia, Tumaco y San Andrés), animando en la región de cada Sede un proceso de construcción colectiva hacia sus realidades y urgencias. Las otras cuatro Sedes (Palmira, Medellín, Manizales y Bogotá) participan en los procesos regionales apoyando las dinámicas puestas en marcha en las zonas fronterizas.

El proyecto contempla un desarrollo en tres etapas: 1. Las fronteras con Venezuela (Arauca y La Paz), con una duración de un año. Serán el proyecto piloto; 2. El Pacífico, también en dos momentos: de un lado el Pacífico Sur (Tumaco y Palmira), del otro el Pacífico Norte (Medellín y Manizales en conexión con Chocó). Tendrá también un año de duración; 3. Finalmente las fronteras del extremo, Leticia en el Amazonas y San Andrés en el Caribe, al año siguiente.

### **2. Paquete de tecnologías alternativas**

Crear un paquete de tecnologías alternativas que sean entregados en las regiones. La Universidad ha explorado multitud de alternativas a una gran cantidad de necesidades. Se propone hacer el traslado y entrega de ellas a la gente en las regiones, aclarando la necesidad de hacerlo mediando una pedagogía que familiarice con su necesidad y las adapte a las particularidades culturales.

### 3. Institucionalización de diplomados

Institucionalizar diplomados de formación de líderes regionales, incluyendo diplomados de temas estratégicos dentro de los procesos de movilización ciudadana.

### 4. Caracterización de las regiones

Como parte de los procesos regionales que empuja el Centro de Pensamiento Región Nación se está proponiendo una caracterización de las regiones con las organizaciones locales. En conexión con esos procesos se propone que la Universidad elabore caracterizaciones regionales con vocación de política pública: para el gobierno que viene en 2022 proponerle una visión de intervención regional en las fronteras.

### 5. Un poder continental frente al narcotráfico

Se propone que la Universidad anime un proceso de reflexión y diseño de una política alternativa frente al narcotráfico. Para ello se sugiere la convocatoria de los países latinoamericanos con miras a la constitución de un polo de poder capaz de hacer frente a la hegemonía mundial de la guerra en la materia.

## BIBLIOGRAFIA

- \* Aguilera, Mario; Perea, Carlos Mario (editores) (2020). Conflicto persistente. IEPRI. Universidad del Rosario: Bogotá.
- \* Angel, Andrés (2020). "Proyectos pilotos de investigación integral de fracking. ¿Qué podría salir mal?". Razón Pública. En: <https://razonpublica.com/proyectos-piloto-investigacion-integral-fracking-podria-salir-mal/>
- \* Archila, Mauricio; García, Martha; Parra, Leonardo; y Restrepo, Ana (2019). Cuando la copa se rebosa. Luchas sociales en Colombia. 1975-2015. CINEP. Programa por la Paz: Bogotá.
- \* Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019). Estudio Económico de América Latina y el Caribe. En: 34
- \* Correa, Darío y Jaramillo, Juan (2019). Reconfiguración del conflicto Armado. Antioquia. Kavilando, No. 12. En: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/7154-reconfiguracion-del-conflicto-armado-antioquia>
- \* El Tiempo (2019). "Cerca de 69.000 personas están en riesgo por grupos armados en Arauca". Julio 27. En: <https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/grupos-armados-en-arauca-tienen-en-riesgo-a-69-000-personas-en-arauca-393974>
- \* Forensis. Datos para la Vida )2016)
- \* Forensis. Datos para la Vida )2018)
- \* Geneve Declaration (2015). Carga Global de la Violencia Armada 2015: Cada Cuerpo cuenta. Ginebra. En: <http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence.html>

- \* Ferrari, Cesar y González, Jorge (2020). Medidas de política económica frente a la crisis. Razón Pública. En: <https://razonpublica.com/medidas-politica-economica-frente-la-crisis/>
- \* Fundación Paz y Reconciliación (PARES) (2019). Sin Dios ni ley. Un análisis de la situación en la frontera Colombo Venezolana. En: <https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-DE-SEGURIDAD-EN-LA-FRONTERA-1.pdf>
- \* González, Camilo (2019). "Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?". Desde abajo. La otra posición para leer. Noviembre 1. En: <https://www.desdeabajo.info/colombia/item/38049-al-rojo-vivo-por-que-en-el-cauca.html>
- \* Kroc Institute for International Peace Studies (2019). Informe 3.Hacia una paz de calidad en Colombia. En: [https://kroc.nd.edu/assets/315919/190408\\_actualizacion\\_informe\\_3\\_instituto\\_kroc\\_feb19.pdf](https://kroc.nd.edu/assets/315919/190408_actualizacion_informe_3_instituto_kroc_feb19.pdf)
- \* Ledermann, Walter (2003). El hombre y sus epidemias a través de la historia. Rev Chil Infect Edition. En: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rci/v20snotashist/art03.pdf>
- \* Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) (2020). Problemática en Oferta de Drogas. Serie Cultivos de Coca. En: <http://www.odc.gov.co/sidco/perfiles/estadisticas-nacionales>
- \* Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2018). Colombia: Monitoreo de Territorios Afectados por los Cultivos Ilícitos.
- \* Organización Mundial de la Salud (2002). Informe Mundial sobre Violencia y Salud. En: <http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence.html>
- \* Perea (2019). Extreme violence without war and its social reproduction: Implications for building peace in Latin America. En: Journal of Peacebuilding, Volume 7, 2019, Issue 3: Post-war and Non-war Violences: Learning about Peace and Peacebuilding from Latin America. DOI: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21647259.2019.1633105>
- \* Vargas, Ricardo (2020).